



## RESPUESTA DEL GOBIERNO

### (184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/30569 a 184/30574  
184/30614

16/12/2020

77837 a 77842  
77884

**AUTOR/A:** JIMÉNEZ REVUELTA, Rodrigo (GVOX); SÁEZ ALONSO-MUÑUMER, Pablo (GVOX); GONZÁLEZ COELLO DE PORTUGAL, Víctor (GVOX); MANSO OLIVAR, Rubén Silvano (GVOX); ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, Iván (GVOX)

### RESPUESTA:

En relación con el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es necesario subrayar que el mandato establecido en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la revisión anual del salario mínimo interprofesional, cumple el objetivo básico de dar cumplimiento, entre otros, al artículo 35 del texto constitucional que obliga a adoptar las medidas necesarias para que el salario percibido por las personas trabajadoras les permita a ellas y a sus familias un nivel de vida decoroso, o de otra forma, que el salario sea suficiente para atender sus necesidades. Dicho artículo 27.1 establece que el Gobierno fija, anualmente, el SMI teniendo en cuenta la evolución de diversas variables: el IPC, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, así como la coyuntura económica general.

El Consejo de Ministros acordó el 28 de diciembre prorrogar el SMI vigente en 2020 a través de la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, fijando la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, para 2020, en 950 euros por 14 pagas. La prórroga tiene carácter temporal hasta que el Gobierno, en el marco del diálogo con los interlocutores sociales, fije un nuevo SMI para 2021. Con esta decisión el Ejecutivo da seguridad jurídica y continuidad a la función del SMI como garantía salarial mínima para las personas trabajadoras.

El Gobierno tiene como objetivo aproximar el Salario Mínimo Interprofesional, a lo largo de la legislatura, al compromiso de la Carta Social Europea, fijado en el 60% del salario medio.

Asimismo, el incremento del salario mínimo interprofesional contribuye a promover un crecimiento económico sostenido, sostenible e inclusivo, y al cumplimiento de la Agenda 2030, en particular de las metas relativas a la erradicación



de la pobreza, la promoción de políticas orientadas a la creación de puestos de trabajo decentes y a la adopción de políticas salariales que logren de manera progresiva una mayor igualdad.

Madrid, 22 de febrero de 2021